TEMA: EL DERECHO Y LA JUSTICIA COMO FACTORES DE ACERCAMIENTO ENTRE LOS PUEBLOS Y SU DESARROLLO ECONÓMICO-SOCIAL.

Excelentísima Señora Presidenta del Tribunal de Última Instancia de la Región Administrativa de Macao-República Popular de China,

Excelentísimos Señores Presidentes de las Cortes Supremas de Justicia de los Países y Territorios de la Lengua Portuguesa,

Excelentísimos Embajadores, Jefes de Misiones Diplomáticas, representantes de Organismos Internacionales,

Dignísimas Autoridades,

Distinguido público asistente, Señoras y Señores;

Es un inmenso honor para mí intervenir por primera vez en este foro, en el contexto de la XIII Conferencia del Fórum de los Presidentes de las Cortes Supremas de Justicia de los Países y Territorios de la

Lengua Portuguesa. Esta tarea, que nos reúne hoy, es fundamental, pues aborda los desafíos jurídicos y las cuestiones de justicia que afectan no solo a nuestros ciudadanos, sino a la estabilidad y el progreso del mundo en su conjunto.

Mi intervención se centrará en un axioma que debemos abrazar con la más profunda convicción y con rigor intelectual: los principios supremos de la República de Guinea Ecuatorial como factores fundamentales sobre el Derecho y la Justicia como Factores de Acercamiento entre los Pueblos y su Desarrollo Económico-Social; Aspectos sobre el Derecho como marco de desarrollo socio-económico en nuestro país; y los Compromisos de la Unión Africana sobre la Justicia y desarrollo socio-económico de nuestra comunidades.

La Justicia, disgnisimas autoridades, no debe ser vista como un mero mecanismo de sanción o de resolución de controversias al final de un conflicto. Por el contrario, es el motor invisible que impulsa y sostiene el progreso de las naciones. Un sistema judicial que es genuinamente sólido, independiente y eficiente no solo cumple la ley; es la garantía fundamental de la confianza institucional, la estabilidad política y la predictibilidad legal.

Estos tres elementos son la trinidad indispensable para la prosperidad. Sin confianza, no hay inversión a largo plazo; sin estabilidad, no hay planeación de infraestructuras o servicios públicos; y sin predictibilidad, el comercio internacional se detiene. En resumen, si fallamos en consolidar estos pilares, el desarrollo económico y la armonía social son, sencillamente, quimeras inalcanzables. Nuestra labor es, por lo tanto, pasar de ser meros aplicadores de la ley a ser ingenieros de la confianza pública, activando el verdadero potencial de nuestros pueblos y naciones.

I. Principios Fundamentales de la República de Guinea Ecuatorial: Unidad, Paz y Justicia (Legislación Nacional Ampliada)

El compromiso con el Estado de Derecho en el continente africano debe comenzar con la coherencia y la firmeza en el plano nacional. En la República de Guinea Ecuatorial, el vínculo indisoluble entre la ley, la justicia y el desarrollo no es una mera aspiración teórica, sino una directriz operativa consagrada en la cúspide de nuestro ordenamiento jurídico: la Ley Fundamental.

A. Valores Supremos y Pacto Nacional

Nuestra Constitución establece firmemente que Guinea Ecuatorial es un Estado soberano, independiente, republicano, social y democrático, donde los valores supremos son la Unidad, la Paz y la Justicia. Este lema nacional es mucho más que una frase protocolaria; es un pacto político nacional fundacional que orienta todas nuestras políticas. Al colocar la Justicia en el centro de la identidad nacional, el Estado se obliga a garantizar la igualdad de oportunidades y la distribución equitativa de los frutos del desarrollo económico. El derecho, para nosotros, es el garante primario de la coexistencia pacífica y el respeto mutuo en una nación pluricultural y en proceso de crecimiento.

B. El Derecho como Marco de Desarrollo Socioeconómico

Nuestra ley nacional asume un compromiso social profundo. Va estratégicamente más allá de la protección de los derechos civiles; asigna al Estado el deber primordial de planificar, dirigir y promover el desarrollo de la economía nacional, con el objetivo de elevar el nivel de vida del pueblo. Este compromiso incluye la obligación de promover las condiciones económicas y sociales para hacer desaparecer la pobreza y la miseria

(Art. 22º), y asegurar la ocupación útil de todos los ciudadanos.

Aquí radica la función crítica del Poder Judicial: actuar como custodio de las condiciones que permiten este desarrollo. Una Corte Suprema que opera con independencia inquebrantable y transparencia probada genera la seguridad jurídica fundamental. Esta seguridad es el mayor imán para atraer la inversión nacional y extranjera y fomentar la diversificación económica. Cuando los inversores confían plenamente en que los derechos de propiedad serán protegidos sin favoritismos y que los contratos serán exigibles ante un tribunal imparcial, el capital se moviliza de manera productiva, creando empleo y riqueza legítima. La lucha frontal contra la corrupción, garantizada por un sistema judicial incorruptible, es el primer dividendo que se paga para asegurar el desarrollo sostenible.

C. Responsabilidad Cívica y Justicia Social

Finalmente, nuestra Constitución nos recuerda que el ciudadano ecuatoguineano tiene el derecho y, al mismo tiempo, el deber ineludible de vivir pacíficamente, respetar los derechos de los demás y contribuir activamente a la formación de una sociedad justa, fraterna y solidaria (Art. 17º). Este es el concepto de justicia social activa,

donde el ciudadano es un agente del desarrollo.

Al combatir sin concesiones toda forma de discriminación (por motivos de etnia, sexo o condición social) y al garantizar el respeto al pleno desenvolvimiento material y moral de la persona, la ley consolida la paz social como un activo estratégico. Una sociedad en la que el pueblo percibe la justicia como justa, accesible e igualitaria se convierte en una sociedad estable y cohesionada. Y la estabilidad, como hemos dicho, es el requisito fundamental e innegociable para que cualquier plan nacional de desarrollo, desde la expansión sanitaria hasta la reforma educativa, pueda ser implementado y tenga éxito duradero.

II. Los Pactos de la Unión Africana: Integración y Desarrollo (Legislación Regional)

El enfoque de Guinea Ecuatorial se proyecta y se integra plenamente en los grandes Pactos Políticos Continentales que cimentan la Unión Africana (UA).

A. El Derecho Humano al Desarrollo (Carta de Banjul)

La Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos (Carta de Banjul) es el faro

ético y jurídico del continente. Es un documento visionario que no solo reconoce los derechos individuales, sino que establece, en su Artículo 22, el Derecho de todos los Pueblos al Desarrollo Económico, Social y Cultural.

Este es un concepto profundamente político y transformador. Eleva la justicia a un nivel colectivo, exigiendo la soberanía total de los pueblos sobre sus riquezas y recursos naturales (Art. 21º) como condición para el desarrollo. La UA reconoce así que la Justicia, más allá de lo legal, es un imperativo histórico y distributivo. Los Estados tenemos el deber de garantizar, individual y colectivamente, el ejercicio de este derecho para el progreso colectivo.

La Justicia como Pilar de la Integración (Agenda 2063): El marco estratégico a largo plazo de la UA, la Agenda 2063: El África que Queremos, cristaliza esta visión. La aspiración número 3 exige un África de Buena Gobernanza, Democracia, Justicia y Estado de Derecho. El acercamiento y la integración de nuestros pueblos y la materialización del progreso económico continental dependen de la Armonización Judicial.

¿Cómo podemos lograr la Zona de Libre Comercio Continental Africana (AFCFTA) si la protección de los contratos, la aplicación de normativas laborales unificadas y la

resolución de disputas transfronterizas son inciertas? Los Poderes Judiciales de África somos llamados a ser los ingenieros de la confianza legal, armonizando procedimientos, compartiendo experiencias y asegurando que las empresas y los ciudadanos puedan operar en un espacio económico verdaderamente integrado, superando las barreras jurídicas heredadas del colonialismo.

Nuestra legislación se integra con los grandes Pactos Políticos Continentales africanos. La Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos (Carta de Banjul) es un instrumento visionario que eleva la justicia a un nivel colectivo, reconociendo el Derecho de los Pueblos al Desarrollo Económico, Social y Cultural (Art. 22º).

Este pacto exige que los Estados garanticen que la soberanía sobre los recursos naturales se traduzca en progreso para las poblaciones. El desarrollo es, por lo tanto, un imperativo de justicia en la Unión Africana, lo cual refuerza nuestra necesidad de cooperación regional.

III. La Necesidad de Cooperación Global para Acercar la Justicia a los Pueblos (La CPLP como Plataforma)

La Comunidad de Países de Lengua Portuguesa (CPLP) se erige como el espacio estratégico

ideal para transformar estos pactos políticos en desarrollo mutuo y acercamiento entre nuestros pueblos.

Compartimos raíces jurídicas, y la Justicia, en el seno de la CPLP, debe ser el catalizador para la aproximación y la facilización económica que la historia nos demanda.

- Lucha contra la Corrupción Transnacional: La cooperación judicial en la CPLP es fundamental para combatir el crimen organizado, el blanqueo de capitales y la corrupción. Al agilizar la asistencia jurídica mutua, la extradición y la recuperación de activos, reforzamos la confianza recíproca y la integridad de nuestros mercados, haciéndolos más seguros y atractivos para la inversión intralusófona.
- Seguridad para el Ciudadano: El derecho y la justicia deben asegurar que la libre circulación de personas dentro de la CPLP sea acompañada de seguridad jurídica plena. El Derecho es el puente para que el ciudadano de un país de la CPLP se sienta protegido en cualquier otro Estado-Miembro.

- Acercamiento a través de la Justicia Global: Los foros internacionales y las instituciones de justicia regional y global deben ser utilizados para promover el diálogo y la rendición de cuentas. Un mundo donde el Derecho es la norma compartida es un mundo donde los pueblos se sienten más seguros y unidos en torno a valores comunes.

Nuestros Supremos Tribunales no pueden limitarse a una lectura literal de la ley. Nuestra jurisprudencia debe ser proactiva e innovadora, actuando como arquitecta activa del desarrollo.

Debemos armonizar procedimientos y compartir buenas prácticas para garantizar la celeridad procesal, especialmente en materias de comercio, propiedad intelectual e inversiones. Esto acelera el crecimiento mutuo y reafirma nuestro compromiso de que la Justicia es transparente, accesible y eficiente para todos los ciudadanos de nuestra comunidad.

Conclusiones:

Señoras y Señores Presidentes, la alta función que ejercemos nos obliga a ir más allá de la simple exégesis legal. Nuestra

labor no es pasiva; debe ser proactiva. Nuestra jurisprudencia, al interpretar y aplicar los pactos políticos que nos unen, debe convertirse en una arquitecta activa del acercamiento entre los pueblos y del desarrollo sostenible.

El Poder Judicial es el garante último de que los pactos políticos —desde la Ley Fundamental de Guinea Ecuatorial hasta la Carta de la Unión Africana— se traduzcan en realidades tangibles para el ciudadano en la calle. Debemos ser la última línea de defensa de los derechos económicos y sociales.

Nuestra lengua portuguesa nos une por la historia y la cultura. Pero lo que verdaderamente nos convierte en una fuerza global de progreso es el compromiso compartido con un ideal superior: la Justicia.

No nos contentemos con ser meros administradores de sistemas heredados. Seamos los ingenieros de la confianza, los custodios de la paz económica y los garantes de la igualdad en cada rincón de nuestra comunidad.

El verdadero pacto político que hoy sellamos no es un acuerdo firmado en papel, sino una promesa de acción. Es la promesa de que la

Justicia, en cada uno de nuestros países, será la luz que disipe la sombra de la pobreza y la inestabilidad.

Unamos nuestras Cortes. Unamos nuestros principios. Unamos nuestra voluntad.

¡Hagamos que el Derecho y la Justicia sean, de una vez por todas, el idioma universal que construya el futuro de prosperidad compartida que nuestros pueblos merecen!

Muchas gracias

TEMA: DIREITO E JUSTIÇA COMO FATORES DE REUNIÃO DOS POVOS E DO SEU DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO E SOCIAL.

Excelência, Senhora Presidente do Tribunal de Última Instância da Região Administrativa de Macau, República Popular da China,

Excelências, Presidentes dos Tribunais Supremos dos Países e Territórios de Língua Portuguesa,

Excelências, Embaixadores, Chefes de Missões Diplomáticas, Representantes de Organizações Internacionais,

Excelentíssimas Autoridades,

Distinta audiência, Senhoras e Senhores;

É para mim uma imensa honra intervir pela primeira vez neste fórum, no âmbito da 13ª Conferência do Fórum dos Presidentes dos Tribunais Supremos dos Países e Territórios de Língua Portuguesa. Esta tarefa, que hoje nos reúne, é fundamental, pois aborda desafios jurídicos e questões de justiça que afetam não só os nossos cidadãos, mas também a estabilidade e o progresso do mundo como um todo.

A minha intervenção centrar-se-á num axioma que devemos abraçar com a mais profunda convicção e rigor intelectual: os princípios supremos da República da Guiné Equatorial como factores fundamentais em relação ao Direito e à Justiça como Factores de Aproximação dos Povos e do seu Desenvolvimento Económico e Social; Aspetos do Direito como estrutura para o desenvolvimento socioeconómico no nosso país; e os Compromissos da União Africana com a Justiça e o desenvolvimento socioeconómico das nossas comunidades.

A Justiça, ilustres autoridades, não deve ser vista como um mero mecanismo para sancionar ou resolver litígios no final de um conflito. Pelo contrário, é o motor invisível que impulsiona e sustenta o progresso das nações. Um sistema judicial genuinamente sólido, independente e eficiente não cumpre apenas a lei; é a garantia fundamental da confiança institucional, da estabilidade política e da previsibilidade jurídica.

Estes três elementos são a trindade indispensável para a prosperidade. Sem confiança, não há investimento a longo prazo; sem estabilidade, não há planeamento para infraestruturas ou serviços públicos; e sem previsibilidade, o comércio internacional estagna. Em suma, se não consolidarmos estes pilares, o desenvolvimento económico e a

harmonia social serão, simplesmente, sonhos inalcançáveis. A nossa tarefa, portanto, é deixar de ser meros aplicadores da lei e tornarmo-nos engenheiros da confiança pública, libertando o verdadeiro potencial dos nossos povos e nações.

I. Princípios Fundamentais da República da Guiné Equatorial: Unidade, Paz e Justiça (Legislação Nacional Alargada)

O compromisso com o Estado de Direito no continente africano deve começar com coerência e firmeza a nível nacional. Na República da Guiné Equatorial, o vínculo indissolúvel entre direito, justiça e desenvolvimento não é uma mera aspiração teórica, mas uma orientação operacional consagrada no vértice do nosso sistema jurídico: a Lei Fundamental.

A. Valores Supremos e Pacto Nacional

A nossa Constituição estabelece firmemente que a Guiné Equatorial é um Estado soberano, independente, republicano, social e democrático, onde os valores supremos são a Unidade, a Paz e a Justiça. Este lema nacional é muito mais do que uma frase cerimonial; Trata-se de um pacto político nacional fundador que orienta todas as nossas políticas. Ao colocar a Justiça no centro da identidade nacional, o Estado compromete-se a

garantir a igualdade de oportunidades e a distribuição equitativa dos frutos do desenvolvimento económico. Para nós, a lei é a principal garantia da coexistência pacífica e do respeito mútuo numa nação multicultural e em crescimento.

B. O Direito como Estrutura para o Desenvolvimento Socioeconómico

A nossa legislação nacional assume um profundo compromisso social. Vai estrategicamente além da proteção dos direitos civis; atribui ao Estado o dever primordial de planear, dirigir e promover o desenvolvimento da economia nacional, com o objetivo de elevar o nível de vida da população. Este compromisso inclui a obrigação de promover condições económicas e sociais para eliminar a pobreza e a miséria (artigo 22.º) e garantir um emprego digno para todos os cidadãos.

Aqui reside o papel fundamental do Poder Judicial: atuar como guardião das condições que permitam esse desenvolvimento. Um Supremo Tribunal que opere com uma independência inabalável e uma transparência comprovada gera uma segurança jurídica fundamental. Esta certeza é o maior atrativo para atrair investimento nacional e estrangeiro e fomentar a diversificação económica. Quando os investidores têm plena confiança de que os direitos de propriedade serão protegidos sem

favoritismo e que os contratos serão exequíveis perante um tribunal imparcial, o capital é mobilizado de forma produtiva, criando emprego e riqueza legítima.

<O combate frontal à corrupção, garantido por um sistema judicial incorruptível, é o primeiro dividendo pago para garantir o desenvolvimento sustentável.

C. Responsabilidade Cívica e Justiça Social

Finalmente, a nossa Constituição recorda-nos que os cidadãos da Guiné Equatorial têm o direito e, ao mesmo tempo, o dever incontornável de viver em paz, respeitar os direitos dos outros e contribuir activamente para a formação de uma sociedade justa, fraterna e solidária (artigo 17º). Este é o conceito de justiça social ativa, onde os cidadãos são agentes de desenvolvimento.

Ao combater intransigentemente todas as formas de discriminação (baseadas na etnia, sexo ou condição social) e ao garantir o respeito pelo pleno desenvolvimento material e moral dos indivíduos, a lei consolida a paz social como um ativo estratégico. Uma sociedade em que o povo perceciona a justiça como justa, acessível e igualitária torna-se uma sociedade estável e coesa. E a estabilidade, como já dissemos, é o requisito fundamental e inegociável para que qualquer plano de desenvolvimento nacional, desde a

expansão da saúde à reforma educativa, seja implementado e alcance um sucesso duradouro.

II. Os Pactos da União Africana: Integração e Desenvolvimento (Legislação Regional)

A abordagem da Guiné Equatorial está concebida e totalmente integrada nos principais Pactos Políticos Continentais que sustentam a União Africana (UA).

A. O Direito Humano ao Desenvolvimento (Carta de Banjul)

A Carta Africana dos Direitos Humanos e dos Povos (Carta de Banjul) é o farol ético e jurídico do continente. É um documento visionário que não só reconhece os direitos individuais, como também estabelece, no artigo 22.º, o Direito de todos os Povos ao Desenvolvimento Económico, Social e Cultural.

Este é um conceito profundamente político e transformador. Eleva a justiça a um nível colectivo, exigindo a plena soberania dos povos sobre as suas riquezas e recursos naturais (artigo 21°) como condição para o desenvolvimento. A UA reconhece, assim, que a justiça, para além do quadro jurídico, é um imperativo histórico e distributivo. Os Estados têm o dever de garantir, individual e coletivamente, o exercício deste direito para o progresso coletivo.

A Justiça como Pilar da Integração (Agenda 2063): O quadro estratégico de longo prazo da UA, a Agenda 2063: A África que Queremos, cristaliza esta visão. A aspiração número 3 apela a uma África de boa governação, democracia, justiça e Estado de direito. A aproximação e integração dos nossos povos e a concretização do progresso económico continental dependem da harmonização judicial.

Como podemos alcançar a Zona de Comércio Livre Continental Africana (ZCLCA) se a protecção dos contratos, a aplicação de normas laborais unificadas e a resolução de litígios transfronteiriços são incertas? Os sistemas judiciários africanos são chamados a ser os engenheiros da confiança jurídica, harmonizando procedimentos, partilhando experiências e garantindo que as empresas e os cidadãos possam operar num espaço económico verdadeiramente integrado, ultrapassando as barreiras jurídicas herdadas do colonialismo.

A nossa legislação está integrada nos principais Pactos Políticos Continentais Africanos. A Carta Africana dos Direitos Humanos e dos Povos (Carta de Banjul) é um instrumento visionário que eleva a justiça a um nível colectivo, reconhecendo o Direito dos Povos ao Desenvolvimento Económico, Social e Cultural (Artigo 22°).

Este Pacto exige que os Estados garantam que a soberania sobre os recursos naturais se traduz em progressos para as suas populações. O desenvolvimento é, portanto, um imperativo de justiça na União Africana, o que reforça a nossa necessidade de cooperação regional.

III. A Necessidade de Cooperação Global para Levar a Justiça aos Povos (A CPLP como Plataforma)

A Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP) apresenta-se como o espaço estratégico ideal para transformar estes pactos políticos em desenvolvimento mútuo e aproximação entre os nossos povos.

Partilhamos raízes jurídicas, e a justiça, dentro da CPLP, deve ser o catalisador para a aproximação e facilitação económica que a história nos exige.

• Combate à Corrupção Transnacional: A cooperação judiciária no seio da CPLP é essencial para combater o crime organizado, o branqueamento de capitais e a corrupção. Ao agilizar a assistência jurídica mútua, a extradição e a recuperação de activos, reforçamos a confiança mútua e a integridade dos nossos mercados, tornando-os mais seguros e atractivos para o investimento intralusófono.

• Segurança Cidadã: A lei e a justiça devem garantir que a livre circulação de pessoas na CPLP é acompanhada de plena segurança jurídica. A lei é a ponte que permite aos cidadãos de um país da CPLP sentirem-se protegidos em qualquer outro Estado-Membro.

• Aproximação através da Justiça Global: Os fóruns internacionais e as instituições regionais e globais de justiça devem ser utilizados para promover o diálogo e a responsabilização. Um mundo onde o direito é a norma partilhada é um mundo onde as pessoas se sentem mais seguras e unidas em torno de valores comuns.

Os nossos Supremos Tribunais não podem limitar-se a uma leitura literal da lei. A nossa jurisprudência deve ser proativa e inovadora, atuando como arquiteta ativa do desenvolvimento.

Devemos harmonizar procedimentos e partilhar boas práticas para garantir a celeridade processual, especialmente em matéria de comércio, propriedade intelectual e investimentos. Isto acelera o crescimento mútuo e reafirma o nosso compromisso com um sistema de justiça transparente, acessível e eficiente para todos os cidadãos da nossa comunidade.

Conclusões:

Senhoras Presidentes, o alto cargo que ocupamos exige que vamos para além da simples exegese jurídica. O nosso trabalho não é passivo; deve ser proactivo. A nossa jurisprudência, ao interpretar e aplicar os pactos políticos que nos unem, deve tornar-se uma arquiteta ativa da aproximação entre os povos e do desenvolvimento sustentável.

O Poder Judicial é o garante máximo de que os pactos políticos – da Lei Fundamental da Guiné Equatorial à Carta da União Africana – se traduzam em realidades tangíveis para os cidadãos sem-abrigo. Devemos ser a última linha de defesa dos direitos económicos e sociais.

A nossa língua portuguesa une-nos pela história e pela cultura. Mas o que realmente nos torna uma força global para o progresso é o nosso compromisso partilhado com um ideal maior: a Justiça.

Não nos contentemos em ser meros administradores de sistemas legados. Sejamos os engenheiros da confiança, os guardiões da paz económica e os garantes da igualdade em todos os cantos da nossa comunidade.

O verdadeiro pacto político que hoje selamos não é um acordo assinado em papel, mas uma

promessa de acção. É a promessa de que a Justiça, em cada um dos nossos países, será a luz que dissipará a sombra da pobreza e da instabilidade.

Unimos os nossos Tribunais. Unimos os nossos princípios. Unimos a nossa vontade.

Façamos do Direito e da Justiça, de uma vez por todas, a linguagem universal que constrói o futuro de prosperidade partilhada que o nosso povo merece!

Muito obrigado.